

Sin derechos laborales

El falso gobierno obrero y la persecución sindical en Venezuela

Carlos Patiño*



ALBA CIUDAD

El paupérrimo salario y las prestaciones sociales, la escasez de alimentos y medicinas, el detrimento de los servicios de salud pública y de los seguros H.C.M, el caos en el transporte, así como las consuetudinarias prácticas antisindicales contra el movimiento sindical autónomo, hacen de este Gobierno la peor pesadilla del obrero y del empleado asalariado

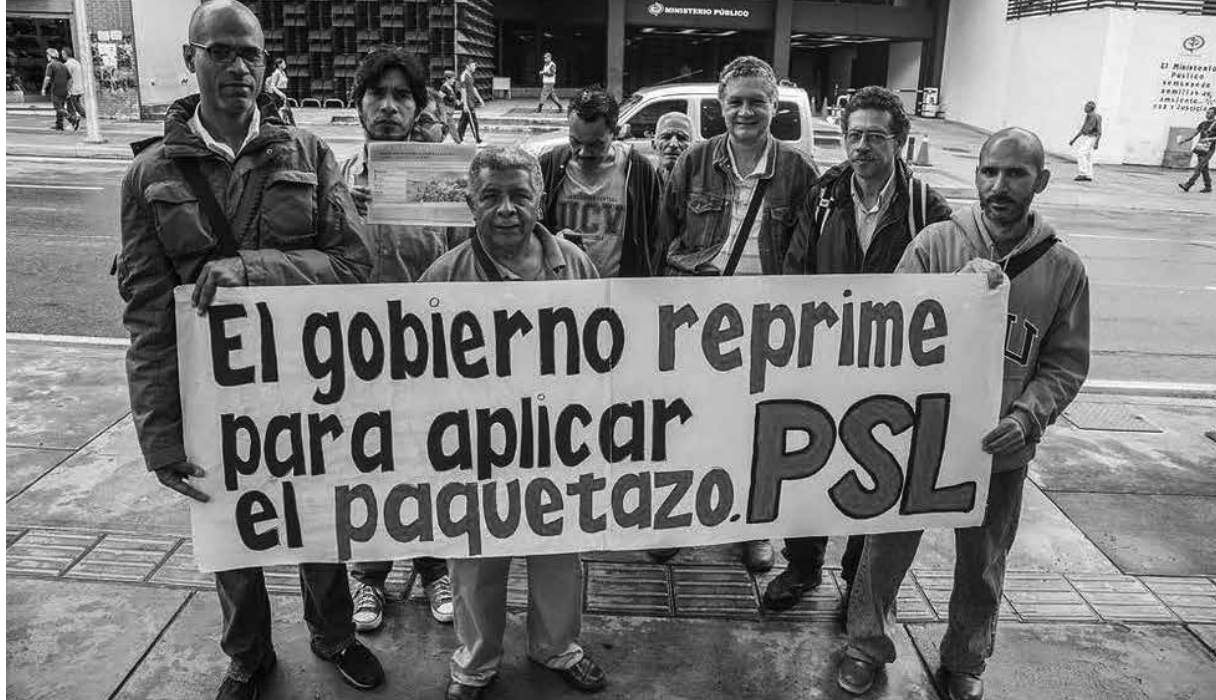
La defensa de nuestros derechos y nuestra dignidad, así como los esfuerzos para nunca dejarnos vencer por el sentimiento de odio—este es el camino que hemos elegido.

LECH WALESIA

a situación de los derechos laborales en Venezuela es mucho más grave que la vivida durante la aplicación de los “paquetes neoliberales” de finales de los noventa. La revolución bolivariana, particularmente a partir de 2015, agudizó la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario obligando a los trabajadores a diversificar sus fuentes de ingreso hacia la informalidad, a costa de la eficiencia en el empleo y la merma en su calidad de vida.

A pesar de las consignas de “Gobierno obrerista”, “unidad obrera” y “la clase obrera y el pueblo al poder”, en la vida real —esa que no aparece en *VTV* ni en *Últimas Noticias*— la pulverización del salario y las prestaciones sociales, el corralito bancario del efectivo, la escasez de alimentos y medicinas, el detrimento de los servicios de salud pública y de los seguros H.C.M, el caos en el transporte que obstaculiza el traslado a los sitios de trabajo, así como las consuetudinarias prácticas antisindicales contra el movimiento sindical autónomo, hacen de este Gobierno la peor pesadilla del obrero y del empleado asalariado.

La pérdida del poder adquisitivo obligó al Ejecutivo Nacional a decretar en 2017 cinco aumentos del salario mínimo unilaterales (sin la participación de sindicatos y empresarios), insuficientes y precarizados mediante la preeminencia del beneficio de alimentación bonificado sin incidencia salarial. Dichos aumentos se desinflaron a los pocos días de decretados, arrasados por una hiperinflación estimada en 2.616 %, tal como se registra en el *Informe anual de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela*, correspondiente al año 2017. Para 2018, la situación se agravó exponencialmente.



LACLASE.INFO

Con empleos precarios y salarios de hambre, los trabajadores organizados (o no) que deciden alzar su voz contra las políticas de pobreza son criminalizados, afectando severamente las garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad sindical, a la huelga y a la participación de los trabajadores en los asuntos públicos.

El Gobierno se ha esforzado en consolidar una “legalidad” alternativa a la Constitución que erosiona la poca institucionalidad democrática y extingue el Estado de derecho, y cuya máxima expresión fue la inconstitucional convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en mayo de 2017. La principal amenaza para los sindicatos y el derecho a la sindicación en Venezuela viene a ser que en el acelerado proceso de desmantelamiento del Estado Social de Derecho y de Justicia, la dictadura de Nicolás Maduro, a través de la fraudulenta ANC, termine por abolir las garantías para los derechos a la libertad sindical, la reunión pacífica y la huelga, con la aprobación de una regresiva nueva constitución ajustada a los cánones de la dictadura.

A partir del 17 de julio de 2017, la organización Provea registró un incremento exponencial de denuncias por parte de trabajadores y funcionarios de ochenta organismos de la administración pública nacional víctimas de amenazas, acoso y despidos, en el marco de la elección de los candidatos a la ANC, así como persecución a trabajadores del sector público que presuntamente participaron en las movilizaciones ciudadanas registradas entre abril y agosto de 2017, ciclo de protestas conocido como la primera rebelión popular venezolana del siglo XXI.

El feroz aparato de propaganda “revolucionaria” ha pretendido invisibilizar estas realidades mediante arengas y frases hechas que no convencen a nadie salvo a los adláteres que se benefician del partido.

Un verdadero gobierno obrerista debe garantizar un salario digno y suficiente, la firma de las convenciones colectivas del sector público y privado, el cese de la criminalización del derecho a huelga, así como el mecanismo de diálogo social tripartito según los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De igual forma debe inhibirse de realizar actos de discriminación política, y adoptar medidas para limitar la participación de militares en el manejo de empresas estatales y la imposición de figuras no civiles como las milicias obreras. Nada de eso se cumple hoy día en el falso gobierno obrero de Nicolás Maduro y su dictadura constituyente.

LA OIT LE PONE FIN A LA FACHADA OBRERISTA DE MADURO

El anuncio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la aprobación de una “Comisión de Encuesta” para Venezuela, instalada a mediados de 2018, no es asunto de tomar a la ligera. Se trata de una investigación internacional de alto nivel por existir serios indicios de que el Gobierno viola de forma grave y persistente convenios laborales; algo que los sindicatos y empresarios del país conocen de sobra pero que ahora se evidencia en la máxima instancia de Naciones Unidas sobre la materia.

Es la decisión más grave y severa que el Consejo de Administración de la OIT puede adoptar en estos casos; en concreto, por las presuntas violaciones de los convenios internacionales relativos a la fijación de salarios mínimos, libertad sindical, protección del derecho de sindicación y consulta tripartita; además de la denuncia específica alegada por la patronal Fedecámaras de ataques, acoso y agresiones; respaldada, a su vez, por la Unidad de Acción Sindical y Gremial (UASG), en una alianza inédita entre empleadores y empleados.

Para tener una idea de la envergadura de esta decisión, en 99 años que tiene la OIT de fundada, el organismo únicamente ha aprobado doce Comisiones de Encuesta, siendo la más reciente la aplicada a Zimbabue en 2008. Además, la comisión no necesita la aprobación del Gobierno, y lo más importante es que se puede instalar tanto dentro como fuera de Venezuela. En ella se hará una revisión exhaustiva de los incumplimientos del Estado y se ratificarán o añadirán nuevas denuncias.

Para enero de este año estaba prevista la visita de una Misión de Alto Nivel de la OIT, tal como sucedió en 2014, donde tuve la oportunidad de participar, entonces, como presidente de Sintrainces y director de derechos humanos de la Alianza Sindical Independiente. Sin embargo, la visita de esta nueva misión (2017-2018) fue cancelada por el Gobierno, lo que aceleró la aprobación de la Comisión de Encuesta.

Las comisiones de encuesta rinden un informe que se publica en un número especial del boletín oficial de la OIT, con difusión mundial, y suele tener una gran repercusión. El Gobierno deberá comunicar al director general de la Organización Internacional del Trabajo, dentro de un plazo de tres meses, si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión y, en caso de que no las acepte, la queja pudiera ser dirimida en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Otra espada de Damocles que pende sobre una dictadura que cínicamente se autodenomina obrerista.

PERSECUCIÓN SINDICAL

Las consecuencias del *Paquetazo Rojo* de Maduro hacia la clase obrera, vigente a partir del mes de septiembre de 2018, aunado a la antes mencionada Comisión de Encuesta de la OIT, ha crispado los nervios de la dictadura a tal punto que ha decidido enfilar contra reconocidos líderes del movimiento de los trabajadores. La revolución, como siempre, en lugar de corregir los errores ataca al emisario.

Durante el mes de septiembre, cuerpos de seguridad del Estado se dedicaron a hostigar, en simultáneo, a Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la empresa del Estado Ferrominera del Orinoco (Sintra-ferrominera), en el estado Bolívar, y a Carlos “Chino” Navarro, presidente de la Central de Trabajadores ASI-Venezuela, afiliada de la Central Sindical de las Américas.

Como aquellos guerrilleros que luego de alcanzar el poder persiguen y encarcelan a sus excompañeros, Nicolás Maduro, exsindicalista del Metro de Caracas, persigue al sindicalismo autónomo y avanza en el plan de su desintegración iniciado por Hugo Chávez desde los tiempos de la confrontación con la Confederación

de Trabajadores de Venezuela (CTV), la promoción del paralelismo sindical y los consejos de trabajadores, la fallida reforma constitucional de 2007 y las disposiciones regresivas de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) de 2012.

El hostigamiento a Carlos Navarro obedece a una retaliación por las denuncias de violaciones de Convenios Internacionales ante la OIT, y por sus declaraciones públicas sobre los efectos negativos que para el sector laboral tiene el *paquetazo* de medidas económicas del Gobierno. Desde entonces ha sido “escoltado” por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como forma de amedrentamiento.

Las prácticas de intimidación al combativo Rubén González ya son recurrentes. Fue preso político de la revolución durante año y medio por haber dirigido una huelga en Ferrominera, y aún se le hostiga cada vez que levanta su voz en defensa de los derechos de los empleados y obreros de las empresas básicas de Guayana.

Más reciente aún, el secretario general de la Federación de Trabajadores del Cemento, Luis Chaparro, fue detenido por la Dirección de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) el miércoles 17 de octubre en horas de la noche y liberado el 18 de octubre, en horas de la mañana. Chaparro es uno de los líderes gremiales que, durante dos semanas, encabezó las protestas de la planta Venezolana de Cementos (Vencemos), en rechazo a lo que consideran la derogación de las contrataciones colectivas tras el aumento lineal de salario establecido por el Gobierno.

Aun así, la dictadura no ha logrado callarlos.

La persecución de dirigentes sindicales se asoma como una tendencia represiva del Gobierno para intentar silenciar la protesta social y detener el acelerado deterioro de su imagen de “gobierno obrero” o “progresista”, ante su base –interna y externa– cada vez más reducida y que se alimenta de una burda propaganda *goebbeliana*. No pudieron antes y no lo lograrán ahora.

*Coordinador de Exigibilidad Provea.